Señores:

**JUZGADO UNICO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE LETICIA.**

E. S. D.

**MEDIO DE CONTROL:** REPARACIÓN DIRECTA

**DEMANDANTES:** ALEXANDER ORTIZ ALBA Y OTROS

**DEMANDADOS:** INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Y OTROS

**LLAMADOS EN GTIA:** ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA E.C.

**RADICACIÓN :** 910013333001**202100160**00

**ASUNTO:** CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Y AL LLAMAMIENTO EL GARANTÍA

**GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA,** mayor de edad, vecino de Cali, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.395.114 expedida en Bogotá D.C., abogado en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No. 39.116, quien obra como apoderado especial de **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA E.C.** tal y como se acredita en el poder anexo, sociedad cooperativa de seguros, legalmente constituida, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., sometida al control y vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, de manera respetuosa y encontrándome dentro del término legal, manifiesto que comedidamente procedo, en primer lugar, a **CONTESTAR LA DEMANDA** formulada por **ALEXANDER ORTIZ ALBA Y OTROS**, y en segundo lugar, a **CONTESTAR EL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA** formulado por la **CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL AMAZONAS – CAFAMAZ,** anunciando desde ahora que me opongo a las pretensiones de la demanda y del llamamiento en garantía, de acuerdo con los fundamentos fácticos y jurídicos que se esgrimen a continuación:

1. **OPORTUNIDAD**

El presente escrito se presenta dentro del término legal establecido, considerando que el auto admisorio del llamamiento en garantía fue emitido el **11 de junio del 2025** y notificado por estado el **12 de junio de 20245**. En consecuencia, el plazo de **15 días hábiles** para dar respuesta inició el **13 de junio de 2025** y finaliza el **7 de julio de 2025**, fecha dentro de la cual se está cumpliendo con la presentación de este documento.

1. **SOLICITUD DE DICTAR SENTENCIA ANTICIPADA POR ENCONTRARSE CONFIGURADA LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA**

De manera respetuosa, solicito al Despacho proferir sentencia anticipada, en virtud de lo dispuesto en el artículo 182A de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021. Esta solicitud se fundamenta en que, en el presente caso, se ha configurado la caducidad del medio de control de reparación directa. Al realizar el análisis de los términos de caducidad aplicables, se evidencia que la demanda fue presentada fuera del plazo legal de dos (2) años establecido en el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). Esta circunstancia es determinante, ya que la caducidad implica la improcedencia para reclamar judicialmente, lo que afecta directamente la viabilidad del presente proceso.

En el presente caso, no resulta procedente el medio de control ejercido por la parte demandante, por cuanto ha operado la caducidad del mismo. Ello obedece a que los hechos que dieron origen al presunto daño ocurrieron el 7 de febrero de 2019, y la solicitud de conciliación extrajudicial fue presentada apenas el 24 de agosto de 2021, cuando ya había vencido el término legal para ejercer la acción. Conforme a lo dispuesto por el artículo 164 del CPACA, el término de caducidad para las acciones de reparación directa es de dos (2) años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho dañoso, es decir, del 8 de febrero de 2019 al 8 de febrero de 2021. Incluso si se considera la suspensión de términos judiciales decretada por el Consejo Superior de la Judicatura con ocasión de la emergencia sanitaria por COVID-19 durante el año 2020, el plazo seguía vigente únicamente hasta el 23 de mayo de 2021. Por tanto, al haber presentado la solicitud de conciliación extrajudicial fuera del término, se configura la caducidad del medio de control, razón por la cual debe declararse su improcedencia.

En este sentido, es preciso hacer referencia a lo dispuesto en el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), en particular al numeral 2, que regula el término de caducidad para la acción de reparación directa. Dicha disposición establece lo siguiente:

**Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda -** La demanda deberá ser presentada:

(…)

La demanda deberá ser presentada:

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:

i) Cuando se pretenda la reparación directa, **la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior** y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

(…)

Por lo anterior, y considerando el término de caducidad previsto en la norma para ejercer el medio de control, se tiene que los demandantes tuvieron conocimiento del hecho que originó el presunto daño el 7 de febrero de 2019, razón por la cual el término de caducidad comenzó a contarse a partir del 8 de febrero del mismo año. Es importante señalar que durante el año 2020 se produjo una suspensión de términos judiciales con ocasión de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia por COVID-19, la cual debe ser tenida en cuenta para efectos del cómputo del término de caducidad.

Esta suspensión de términos tuvo lugar entre el 16 de marzo de 2020 y el 30 de junio de 2020, reanudándose los términos judiciales a partir del 1 de julio de 2020. Lo anterior equivale a una interrupción total de tres (3) meses y dieciséis (16) días, los cuales deben ser adicionados al cómputo del término de caducidad. En consecuencia, el plazo máximo para presentar la demanda o, por lo menos, radicar la solicitud de conciliación extrajudicial en los términos del artículo 164 del CPACA, se prorrogaba hasta el 23 de mayo de 2021. No obstante, según consta en el expediente, la solicitud de conciliación fue presentada el 24 de agosto de 2021, es decir, con un retraso de tres (3) meses y un (1) día respecto del término legal ampliado. Por tanto, se configura de manera clara e inequívoca la caducidad del medio de control, lo que torna improcedente la presente acción de reparación directa.

Sobre el punto, se precisa que el artículo 182 de la ley 1437 de 2011, adicionado por el artículo 42 de la ley 2080 de 2021 dispone lo siguiente:

**ARTÍCULO 182A. SENTENCIA ANTICIPADA.** Se podrá dictar sentencia anticipada: (…) 3. En cualquier estado del proceso, cuando el juzgador encuentre probada la cosa juzgada, la caducidad, la transacción, la conciliación, la falta manifiesta de legitimación en la causa y la prescripción extintiva.

Por lo anterior, y toda vez que se cumplen los presupuestos establecidos en el artículo 182A del CPACA, solicito a su señoría que se dicte **SENTENCIA ANTICIPADA**, declarando probada la excepción de **CADUCIDAD** del medio de control, aquí propuesta.

**CAPÍTULO I**

**CONTESTACIÓN A LA DEMANDA**

1. **FRENTE A LOS HECHOS DE LA DEMANDA**

**AL HECHO PRIMERO:** A la Aseguradora Solidaria de Colombia E.C. no le consta de manera directa lo afirmado por los demandantes, ya que las circunstancias mencionadas le son completamente ajenas, al no tener participación ni injerencia, directa o indirecta, en los hechos narrados. No obstante, conforme a lo expuesto en las contestaciones de las entidades demandadas y en los documentos allegados como prueba dentro del proceso, se advierte que entre el ICBF y CAFAMAZ se celebró el Convenio de Asociación No. 044 de 2019, cuyo objeto era la prestación del servicio de Centros de Desarrollo Infantil y de Desarrollo Infantil en Medio Familiar, según lo dispuesto en el documento que obra en el plenario.

**AL HECHO SEGUNDO:** A la Aseguradora Solidaria de Colombia E.C. no le consta de manera directa lo afirmado por los demandantes, toda vez que las circunstancias a las que aluden le son ajenas, dado que no tiene injerencia, ni directa ni indirecta, en los hechos aquí narrados. En cuanto a la vinculación de las menores y el tiempo en que esta se produjo, nos atenemos a lo que se logre demostrar dentro del plenario, conforme a las pruebas que resulten pertinentes y conducentes para tal fin.

**AL HECHO TERCERO:** A la Aseguradora Solidaria de Colombia E.C. no le consta de manera directa lo afirmado por los demandantes, toda vez que las circunstancias a las que aluden le son ajenas, en tanto no tiene injerencia, ni directa ni indirecta, en los hechos aquí narrados. En lo que respecta a la asistencia de las menores al programa el día 7 de febrero de 2019, así como al horario en el que permanecieron en el mismo, esta parte se atiene a lo que se logre acreditar dentro del plenario, conforme a las pruebas que resulten pertinentes, conducentes y debidamente allegadas al expediente.

**AL HECHO CUARTO:** A la Aseguradora Solidaria de Colombia E.C. no le consta de manera directa lo afirmado por los demandantes, toda vez que las circunstancias a las que hacen referencia le son ajenas, dado que no tiene injerencia, ni directa ni indirecta, en los hechos aquí narrados. En cuanto a las manifestaciones realizadas por el padre de la menor, es preciso señalar que los hechos deberán estar plenamente acreditados con base en las pruebas que sean pertinentes, conducentes y debidamente allegadas al proceso. Además, al tratarse de un asunto tan delicado como lo serían presuntos actos sexuales en contra de una menor de edad —circunstancia de extrema gravedad tanto por la naturaleza del daño que puede causarse a la víctima como por las implicaciones legales y sociales que recaen sobre el presunto victimario—, cualquier afirmación o conclusión judicial debe estar libre de toda duda razonable. Solo así se podrá garantizar que no se vulnere injustamente a ninguna de las partes intervinientes en el proceso.

**AL HECHO QUINTO:** A la Aseguradora Solidaria de Colombia E.C. no le consta de manera directa lo afirmado por los demandantes, toda vez que las circunstancias a las que aluden le son ajenas, en tanto no tiene injerencia, ni directa ni indirecta, en los hechos aquí narrados. Se deberá acreditar las pruebas que resulten pertinentes, conducentes por la parte que alega el daño, que en efecto la responsabilidad del acto que menciona recae sobre las entidades demandadas.

**AL HECHO QUINTO:** A la Aseguradora Solidaria de Colombia E.C. no le consta de manera directa lo afirmado por los demandantes, toda vez que las circunstancias a las que aluden le son ajenas, en tanto no tiene injerencia, ni directa ni indirecta, en los hechos aquí narrados.

1. **PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LAS PRETENSIONES**

Me opongo a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, en tanto en el presente caso la Caja de Compensación Familiar del Amazonas – CAFAMAZ actuó con diligencia y en estricto cumplimiento de los deberes y responsabilidades asumidos en el marco del convenio celebrado con el ICBF. La entidad no tuvo injerencia en los hechos que son objeto de debate en este proceso, ni incurrió en acción u omisión alguna que permita atribuirle algún tipo de responsabilidad. Debe resaltarse que CAFAMAZ cumplió con la ejecución del convenio dentro de los parámetros legales, técnicos y administrativos exigidos, adoptando las medidas necesarias para garantizar el adecuado desarrollo del programa y la atención integral de los beneficiarios. De otro lado, no se ha acreditado dentro del plenario un nexo causal directo entre la actuación de CAFAMAZ y los hechos que se alegan como generadores del presunto daño, por lo que mal podría atribuírsele responsabilidad alguna sin que exista prueba clara, precisa y debidamente valorada en tal sentido, en consecuencia, cualquier imputación de responsabilidad carece de sustento fáctico y jurídico.

**FRENTE A LA PRETENSIÓN PRIMERA:** **ME OPONGO** en la medida en que no se encuentra acreditada ninguna conducta dolosa, culposa u omisiva por parte de la Caja de Compensación Familiar del Amazonas – CAFAMAZ, que permita atribuirle responsabilidad administrativa o extracontractual por los hechos ocurridos el 7 de febrero de 2019 en el CDI MAÜ. La entidad actuó conforme a sus deberes contractuales y protocolos establecidos, y no existe prueba que permita establecer un nexo causal directo entre su actuación y el presunto daño alegado. La gravedad del hecho que se pretende hacer valer exige certeza probatoria, no meras conjeturas o imputaciones genéricas.

**FRENTE A LA PRETENSIÓN SEGUNDA: ME OPONGO** a la pretensión mediante la cual se solicita condenar a la Nación – ICBF y a la Caja de Compensación Familiar del Amazonas – CAFAMAZ al pago de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por concepto de perjuicios morales en calidad de daño emergente, a favor de la menor, Dicha solicitud carece de fundamento, en la medida en que no obra en el expediente prueba clara, directa y concluyente que permita atribuir a CAFAMAZ una conducta activa u omisiva que haya generado el presunto daño. La entidad actuó conforme a los deberes legales y contractuales asumidos en el marco del convenio suscrito con el ICBF, cumpliendo con la debida diligencia en la atención de los menores bajo su cuidado.

Tratándose de una acusación de extrema gravedad, como lo es un presunto acto sexual contra una menor de edad, se exige certeza probatoria sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como sobre la identificación del presunto autor. En este caso, no solo no se ha acreditado una falla en el servicio atribuible a CAFAMAZ, sino que tampoco se ha demostrado un vínculo causal entre su actuación y el hecho lamentable alegado. Por tanto, no resulta jurídicamente viable imponer a CAFAMAZ una condena por daño emergente sin que se configure ninguno de los elementos estructurales de la responsabilidad extracontractual del Estado.

**FRENTE A LA PRETENSIÓN TERCERA: ME OPONGO**, por cuanto los llamados perjuicios psicológicos hacen parte de los perjuicios morales y no pueden reclamarse como conceptos distintos, so pena de incurrir en una indebida duplicidad indemnizatoria. Además, no se ha acreditado dentro del proceso que CAFAMAZ haya incurrido en una conducta activa u omisiva que permita atribuirle responsabilidad, ni se ha demostrado un nexo causal entre su actuación y el supuesto daño a la vida de relación de la menor. Por tanto, no procede imponer condena alguna en este sentido.

**FRENTE A LA PRETENSIÓN CUARTA: ME OPONGO**, a la pretensión mediante la cual se solicita condenar a la Nación – ICBF y a la Caja de Compensación Familiar del Amazonas – CAFAMAZ al pago de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por concepto de perjuicios morales a favor del padre de la menor. Dicha solicitud carece de fundamento, en la medida en que no obra en el expediente prueba clara, directa y concluyente que permita atribuir a CAFAMAZ una conducta activa u omisiva que haya generado el presunto daño. La entidad actuó conforme a los deberes legales y contractuales asumidos en el marco del convenio suscrito con el ICBF, cumpliendo con la debida diligencia en la atención de los menores bajo su cuidado.

Tratándose de una acusación de extrema gravedad, como lo es un presunto acto sexual contra una menor de edad, se exige certeza probatoria sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como sobre la identificación del presunto autor. En este caso, no solo no se ha acreditado una falla en el servicio atribuible a CAFAMAZ, sino que tampoco se ha demostrado un vínculo causal entre su actuación y el hecho lamentable alegado. Por tanto, no resulta jurídicamente viable imponer a CAFAMAZ una condena por daño emergente sin que se configure ninguno de los elementos estructurales de la responsabilidad extracontractual del Estado.

**FRENTE A LA PRETENSIÓN QUINTA: ME OPONGO**, a la pretensión mediante la cual se solicita condenar a la Nación – ICBF y a la Caja de Compensación Familiar del Amazonas – CAFAMAZ al pago de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por concepto de perjuicios morales a favor de la señora RITA ALBA ZUTA, como abuela de la menor. Dicha solicitud carece de fundamento, en la medida en que no obra en el expediente prueba clara, directa y concluyente que permita atribuir a CAFAMAZ una conducta activa u omisiva que haya generado el presunto daño. La entidad actuó conforme a los deberes legales y contractuales asumidos en el marco del convenio suscrito con el ICBF, cumpliendo con la debida diligencia en la atención de los menores bajo su cuidado.

**FRENTE A LA PRETENSIÓN SEXTA: ME OPONGO**, a la pretensión mediante la cual se solicita condenar a la Nación – ICBF y a la Caja de Compensación Familiar del Amazonas – CAFAMAZ al pago de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por concepto de perjuicios morales a favor de ERIKA RODRIGUEZ ZUTA, como hermana de la afectada. Dicha solicitud carece de fundamento, en la medida en que no obra en el expediente prueba clara, directa y concluyente que permita atribuir a CAFAMAZ una conducta activa u omisiva que haya generado el presunto daño. La entidad actuó conforme a los deberes legales y contractuales asumidos en el marco del convenio suscrito con el ICBF, cumpliendo con la debida diligencia en la atención de los menores bajo su cuidado.

**FRENTE A LA PRETENSIÓN SEPTIMA: ME OPONGO** a la prosperidad de la pretensión relativa al pago de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de los señores Marcelino Ortiz Alba, Wilington Ortiz Alba, Francisco Antonio Ortiz Alba, Janett Ortiz Alba y Verónica Ortiz Alba, en su calidad de tíos de la menor Karol Nicole Ortiz Rodríguez, por concepto de perjuicios morales y psicológicos, toda vez que no se ha acreditado dentro del proceso que hayan sufrido un daño directo, real y personal como consecuencia del hecho alegado. La jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido que, tratándose de terceros distintos al núcleo familiar más cercano (padres, hijos o cónyuge), es necesario demostrar un vínculo afectivo excepcional y un perjuicio cierto y específico, condiciones que no se configuran en este caso.

Adicionalmente, no se ha demostrado que CAFAMAZ haya incurrido en una conducta activa u omisiva que pueda considerarse generadora de los perjuicios reclamados, ni existe nexo causal alguno entre su actuación y la presunta afectación emocional de los tíos de la menor. En consecuencia, no procede el reconocimiento de indemnización alguna a su favor.

**FRENTE A LA PRETENSIÓN OCTAVA: ME OPONGO** a la prosperidad de esta pretensión por cuanto no existe responsabilidad alguna atribuible a las entidades demandadas. En consecuencia, no es procedente la aplicación de intereses moratorios sobre una condena que no resulta viable en los términos propuestos por la parte actora.

**FRENTE A LA PRETENSIÓN NOVENA: ME OPONGO** por cuanto no existe responsabilidad alguna atribuible a las entidades demandadas, en consecuencia, esta pretensión debe ser rechazada.

**FRENTE A LA PRETENSIÓN DÉCIMA**: **ME OPONGO** a la décima pretensión, consistente en condenar en costas a la parte demandada, con fundamento en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011. En este caso, no se ha demostrado la prosperidad de las pretensiones de la demanda, ni la existencia de conducta alguna de la parte demandada que justifique la imposición de costas. Por el contrario, esta parte ha ejercido su defensa en derecho y dentro de lo que a bien tiene como principios del debido proceso, por lo que no hay lugar a condena en costas.

1. **EXCEPCIONES PREVIAS FRENTE A LA DEMANDA**
2. **INADMISIBILIDAD DEL MEDIO DE CONTROL POR HABERSE CONFIGURADO LA CADUCIDAD.**

En el presente caso, no resulta procedente el medio de control ejercido por la parte demandante, por cuanto ha operado la caducidad del mismo. Ello obedece a que los hechos que dieron origen al presunto daño ocurrieron el 7 de febrero de 2019, y la solicitud de conciliación extrajudicial fue presentada apenas el 24 de agosto de 2021, cuando ya había vencido el término legal para ejercer la acción. Conforme a lo dispuesto por el artículo 164 del CPACA, el término de caducidad para las acciones de reparación directa es de dos (2) años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho dañoso, es decir, del 8 de febrero de 2019 al 8 de febrero de 2021. Incluso si se considera la suspensión de términos judiciales decretada por el Consejo Superior de la Judicatura con ocasión de la emergencia sanitaria por COVID-19 durante el año 2020, el plazo seguía vigente únicamente hasta el 23 de mayo de 2021. Por tanto, al haber presentado la solicitud de conciliación extrajudicial fuera del término, se configura la caducidad del medio de control, razón por la cual debe declararse su improcedencia.

En este sentido, es preciso hacer referencia a lo dispuesto en el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), en particular al numeral 2, que regula el término de caducidad para la acción de reparación directa. Dicha disposición establece lo siguiente:

**Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda -** La demanda deberá ser presentada:

(…)

La demanda deberá ser presentada:

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:

i) Cuando se pretenda la reparación directa, **la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior** y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

(…)

Por lo anterior, y considerando el término de caducidad previsto en la norma para ejercer el medio de control, se tiene que los demandantes tuvieron conocimiento del hecho que originó el presunto daño el 7 de febrero de 2019, razón por la cual el término de caducidad comenzó a contarse a partir del 8 de febrero del mismo año. Es importante señalar que durante el año 2020 se produjo una suspensión de términos judiciales con ocasión de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia por COVID-19, la cual debe ser tenida en cuenta para efectos del cómputo del término de caducidad.

Esta suspensión de términos tuvo lugar entre el 16 de marzo de 2020 y el 30 de junio de 2020, reanudándose los términos judiciales a partir del 1 de julio de 2020. Lo anterior equivale a una interrupción total de tres (3) meses y dieciséis (16) días, los cuales deben ser adicionados al cómputo del término de caducidad. En consecuencia, el plazo máximo para presentar la demanda o, por lo menos, radicar la solicitud de conciliación extrajudicial en los términos del artículo 164 del CPACA, se prorrogaba hasta el 23 de mayo de 2021. No obstante, según consta en el expediente, la solicitud de conciliación fue presentada el 24 de agosto de 2021, es decir, con un retraso de tres (3) meses y un (1) día respecto del término legal ampliado. Por tanto, se configura de manera clara e inequívoca la caducidad del medio de control, lo que torna improcedente la presente acción de reparación directa.

En consecuencia, y conforme a lo expuesto, se concluye que en el presente caso **operó la caducidad del medio de control** de reparación directa, al haberse superado el término legal de dos (2) años previsto en el artículo 164 del CPACA, incluso con la inclusión de la suspensión de términos judiciales ocasionada por la emergencia sanitaria del COVID-19. La presentación extemporánea de la solicitud de conciliación extrajudicial evidencia la pérdida de oportunidad procesal para ejercer válidamente la acción, razón por la cual se solicita se declare probada la excepción de caducidad y, en consecuencia, se declare improcedente la demanda.

1. **EXCEPCIONES PREVIAS FRENTE A LA DEMANDA**
2. **EXCEPCIONES PLANTEADAS POR CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL AMAZONAS – CAFAMAZ, ENTIDAD QUE LLAMÓ EN GARANTÍA A MÍ REPRESENTADA**.

Coadyuvo las excepciones propuestas por la **CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL AMAZONAS - CAFAMAZ**, solo en cuanto las mismas no perjudiquen los intereses de mi representada y bajo ese mismo tenor, formulo las siguientes:

1. **INEXISTENCIA DEL NEXO CAUSAL ENTRE LA ACTUACIÓN DE LA ENTIDAD DEMANDADA Y EL DAÑO ALEGADO**

En el presente caso, la parte demandante no ha acreditado la existencia del nexo de causalidad entre la actuación de CAFAMAZ y el presunto daño alegado. Si bien los hechos que dan origen al presente medio de control son de especial sensibilidad, ello no exime a quien afirma haber sufrido un daño de cumplir con la carga procesal de demostrar que dicho perjuicio guarda una relación directa, real y jurídicamente relevante con una acción u omisión atribuible a la entidad demandada.

Del análisis del material probatorio obrante en el expediente, no se advierte prueba directa ni indirecta que permita establecer una relación de causalidad clara, concreta y jurídicamente relevante entre la conducta de CAFAMAZ y el supuesto perjuicio invocado. Por el contrario, los documentos aportados al proceso —tales como actas de reuniones, informes de seguimiento y registros internos del Centro de Desarrollo Infantil (CDI)— dan cuenta de que el personal adscrito a la entidad actuó con la debida diligencia y cumplimiento de los protocolos establecidos para la atención, acompañamiento y protección de los menores bajo su responsabilidad.

Por otro lado, se observa que el día de los hechos no se registró el ingreso de personas ajenas al equipo de trabajo habitual del CDI, lo cual descarta razonablemente la hipótesis de una omisión en el control de acceso o de la presencia de terceros que pudieran estar relacionados con el presunto daño. En consecuencia, no existe ningún elemento objetivo dentro del plenario que permita inferir una conducta activa u omisiva atribuible a CAFAMAZ que haya sido determinante en la producción del hecho dañoso.

En desarrollo de la investigación interna adelantada por CAFAMAZ, se realizó una exposición detallada sobre la situación del señor Raimundo Muca, quien se desempeñaba como auxiliar de servicios generales en el CDI MAÜ y fue señalado por el padre de la menor como posible implicado en el presunto acto de abuso sexual. No obstante, del análisis objetivo del material documental y testimonial recolectado, no se desprende prueba alguna que lo vincule con los hechos denunciados, ni que comprometa su conducta en el marco de sus funciones.

En primer lugar, CAFAMAZ dentro del proceso con las pruebas aportadas por la entidad se observa que el señor Raimundo Muca contaba con experiencia previa en programas dirigidos a la atención de la primera infancia, y que al momento de su vinculación laboral no registraba antecedentes penales, disciplinarios ni inhabilidades por delitos sexuales contra menores de edad. Estos aspectos fueron verificados por medio de certificaciones y consultas a los sistemas de antecedentes pertinentes, lo cual evidencia el cumplimiento por parte de la entidad de los requisitos legales y contractuales en materia de selección y vinculación de personal.

En segundo lugar, conforme a las actas de la investigación interna y los testimonios recaudados, se estableció que Raimundo Muca no tuvo contacto directo ni desempeñó funciones de cuidado, vigilancia o atención de menores durante la jornada del 7 de febrero de 2019. Su labor como auxiliar de servicios generales se limitaba a la ejecución de tareas de aseo antes y después de las jornadas de atención, sin que se identificara su presencia en los espacios exclusivos de los menores, como baños o salones de actividades, durante el tiempo en que estos eran atendidos. Incluso, los miembros del personal del CDI manifestaron de forma consistente que no lo observaron participar en actividades con los niños, ni ingresar a áreas restringidas o sensibles. Adicionalmente, CAFAMAZ aclaró que la desvinculación del empleado no obedeció a una medida disciplinaria derivada de la denuncia del padre de la menor, sino a una renuncia voluntaria presentada por el trabajador, sin que exista constancia de sanción o investigación formal en su contra por parte de la entidad.

Por tanto, la totalidad de los elementos analizados conduce a la conclusión de que no existen pruebas que comprometan disciplinaria o penalmente al señor Raimundo Muca, ni que permitan establecer una relación entre su conducta y el daño alegado. Así, CAFAMAZ reitera que cumplió diligentemente con su deber de selección, control y supervisión del personal, razón por la cual no puede atribuírsele responsabilidad alguna por una conducta individual no acreditada, y mucho menos cuando se desconoce el autor cierto del hecho.

De este modo, la ausencia de una prueba sólida y convincente sobre estos aspectos resulta determinante, ya que impide configurar la responsabilidad alegada. Es importante recordar que, conforme a los lineamientos jurisprudenciales, corresponde a quien alega un daño probar no solo su existencia, sino también su origen y la relación causal directa con la actuación del supuesto responsable. Sobre este punto, el Consejo de Estado ha precisado que la mera afirmación de un perjuicio no es suficiente para derivar responsabilidades, siendo indispensable que la parte actora demuestre, a través de pruebas idóneas y pertinentes, que dicho perjuicio es atribuible a una acción u omisión negligente del demandado. Así las cosas, se ha precisado lo siguiente:

El nexo causal es la determinación de que un hecho es la causa de un daño. En esa medida, en aras de establecer la existencia del nexo causal es necesario **determinar si la conducta imputada a la Administración fue la causa eficiente y determinante del daño que dicen haber sufrido** quienes deciden acudir ante el juez con miras a que les sean restablecidos los derechos conculcados.” (Negrilla por fuera del texto original).

Por otra parte, es necesario tener en cuenta que en todos los casos, se debe acreditar la relación de causalidad entre la actuación de la entidad demandada y el daño antijurídico por el que se reclama indemnización de perjuicios, sin que sea suficiente para ello con probar la sola relación o contacto que hubo entre aquella y el paciente, ya que la responsabilidad sólo surge en la medida en que se acredite que una actuación u omisión de la Administración, fue la causa eficiente del hecho dañoso; y como reiteradamente lo ha sostenido la jurisprudencia, **el nexo causal no se presume, debe aparecer debidamente probado** (…)[[1]](#footnote-1)

Vale señalar que, en materia de responsabilidad estatal, el asunto no puede ser resuelto con la sola constatación de la intervención causal de la actuación médica, sino que esa actuación debe ser constitutiva de una falla del servicio y ser ésta su causa eficiente. Esa afirmación resulta relevante para aclarar que si bien de conformidad con lo previsto en el artículo 90 de la Constitución, el derecho a la reparación se fundamenta en la antijuridicidad del daño, no es suficiente verificar que la víctima o sus beneficiarios no estaban en el deber jurídico de soportarlo para que surja el derecho a la indemnización, **sino que se requiere que dicho daño sea imputable a la Administración, y no lo será cuando su intervención aunque vinculada causalmente al daño no fue la causa eficiente del mismo** (…)”(Negrilla por fuera del texto original).

En esa misma línea, la doctrina ha señalado que la carga probatoria en materia de responsabilidad recae de manera preponderante en la parte actora, así:

En la responsabilidad civil existen dos nexos causales: primero, entre la culpa y el hecho, y el segundo, entre el hecho y el daño. Si no hay nexo causal entre la culpa y el hecho, hay causa extraña. Si no hay nexo causal entre el hecho y el daño, este es indirecto.

Para que exista responsabilidad civil subjetiva, bien sea contractual o extracontractual, se requieren cuatro elementos: culpa, hecho, daño y nexo causal. En el caso de la responsabilidad civil objetiva, se necesitan tres elementos: hecho, daño y nexo causal[[2]](#footnote-2)

Así las cosas, no se ha acreditado, ni directa ni indirectamente, la existencia de un nexo de causalidad entre la conducta de CAFAMAZ y el presunto daño alegado por la parte actora. Las pruebas obrantes en el expediente descartan cualquier participación del señor Raimundo Muca en hechos que pudieran comprometer su responsabilidad o la de la entidad, y demuestran que CAFAMAZ cumplió con sus deberes de selección, vigilancia y atención, dentro del marco de sus funciones contractuales.

Tal como lo ha señalado reiteradamente la jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado, la responsabilidad estatal por falla del servicio es de carácter subjetivo, lo cual implica que debe estar debidamente acreditada la existencia del daño, la conducta u omisión de la entidad, y el nexo de causalidad entre ambos. No basta con alegar la existencia de un perjuicio o con establecer un vínculo institucional entre la víctima y la administración; es indispensable probar que fue una actuación negligente u omisiva la que constituyó la causa eficiente del daño.

En este sentido, y conforme al artículo 90 de la Constitución Política, no toda afectación genera per se una obligación indemnizatoria por parte del Estado. Es deber del demandante probar, mediante medios idóneos y pertinentes, que el daño antijurídico sufrido es atribuible a la entidad demandada, sin que sea posible presumir la responsabilidad por la mera ocurrencia de un hecho lamentable dentro de una institución del Estado. Por tanto, ante la ausencia de prueba concluyente sobre el nexo de causalidad exigido por la ley y la jurisprudencia, resulta inviable jurídicamente atribuir responsabilidad a CAFAMAZ en este caso. En consecuencia, debe declararse no probada la imputación de responsabilidad extracontractual y, por lo tanto, rechazarse las pretensiones de la demanda.

1. **IMPROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO DE LOS PERJUICIOS MORALES POR SU EXESIVA CUANTIFICACIÓN YA QUE DESCONOCE LOS LIMITES JURISPRUDENCIALES.**

En el presente caso, la parte demandante solicita el reconocimiento de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) por concepto de perjuicios morales, en calidad de daño emergente, a favor de la menor. De forma paralela, pretende que se reconozca una suma idéntica —cien (100) SMLMV— por concepto de perjuicios psicológicos. Sin embargo, omite señalar que los perjuicios psicológicos alegados se encuentran comprendidos dentro de los perjuicios morales ya solicitados en primera instancia, lo cual ha sido reiteradamente reconocido por la jurisprudencia del Consejo de Estado. En efecto, los daños psicológicos derivados de hechos lesivos a la dignidad o integridad emocional de una persona hacen parte de los perjuicios morales y no constituyen un concepto autónomo indemnizable, so pena de incurrir en una indebida duplicidad indemnizatoria.

Por otro lado, en lo que respecta a la pretensión de reconocer el pago de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) a favor del padre de la menor y cincuenta (50) SMLMV a favor de su hermana, tampoco resulta procedente, toda vez que no se ha acreditado dentro del proceso que CAFAMAZ haya incurrido en una conducta activa u omisiva que permita atribuirle responsabilidad alguna, ni se ha demostrado la existencia de un nexo causal directo y jurídicamente relevante entre su actuación y la supuesta afectación emocional o psicológica sufrida por los familiares de la menor. En consecuencia, no procede el reconocimiento de indemnización por este concepto, ni en la cuantía solicitada ni como rubro autónomo, al no haberse cumplido los requisitos esenciales para la configuración de la responsabilidad extracontractual del Estado, a saber: la existencia de un daño antijurídico, una falla en el servicio y un nexo de causalidad entre ambos.

Respecto de los demás familiares que solicitan indemnización por los hechos narrados en la demanda; en particular, los tíos y la abuela de la menor, debe señalarse que no aportaron pruebas que acrediten de manera suficiente el daño alegado. La jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado ha sido clara al establecer que, tratándose de personas distintas al núcleo familiar más cercano (padres, hijos o cónyuge), se requiere acreditar un vínculo afectivo excepcional, así como la existencia de un perjuicio cierto, concreto y específico derivado de los hechos objeto del proceso. En el presente caso, no se evidencia en el expediente prueba alguna que permita tener por acreditadas dichas condiciones, razón por la cual no procede el reconocimiento de indemnización a su favor.

Así pues, frente a los perjuicios morales solicitados en el libelo de la demanda, es preciso señalar que el Honorable Consejo de Estado, mediante Sentencia de Unificación del 28 de agosto de 2014, unificó jurisprudencia en torno a los montos del resarcimiento cuando se reclaman perjuicios inmateriales. En lo atinente al daño moral, el tribunal de cierre en materia contencioso-administrativa indicó:

Procede la Sala a unificar la jurisprudencia en materia de reparación de perjuicios inmateriales; lo anterior, por cuanto la Sección considera necesario y oportuno determinar los criterios generales que se deben tener en cuenta para la liquidación del mencionado perjuicio. (..) Así las cosas, tenemos que el concepto de perjuicio moral se encuentra compuesto por el dolor, la aflicción y en general los sentimientos de desesperación, congoja, desasosiego, temor, zozobra, etc., que invaden a la víctima directa o indirecta de un daño antijurídico, individual o colectivo. En consecuencia, para la reparación del perjuicio moral en caso de muerte se han diseñado cinco niveles de cercanía afectiva entre la víctima directa y aquellos que acuden a la justicia en calidad de perjudicados o víctimas indirectas, los cuales se distribuyen así: Nivel No. 1. Comprende la relación afectiva, propia de las relaciones conyugales y paterno- filiales o, en general, de los miembros de un mismo núcleo familiar (1er. Grado de consanguinidad, cónyuges o compañeros permanentes o estables). A este nivel corresponde el tope indemnizatorio de 100 SMLMV. Nivel No. 2. Donde se ubica la relación afectiva propia del segundo grado de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 50% del tope indemnizatorio. Nivel No. 3. Está comprendido por la relación afectiva propia del tercer grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 35% del tope indemnizatorio. Nivel No. 4. Aquí se ubica la relación afectiva propia del cuarto grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 25% del tope indemnizatorio. Nivel No. 5. Comprende las relaciones afectivas no familiares (terceros damnificados). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 15% del tope indemnizatorio. (…) Así las cosas, para los niveles 1 y 2 se requerirá la prueba del estado civil o de la convivencia de los compañeros. Para los niveles 3 y 4, además, se requerirá la prueba de la relación afectiva, y finalmente, para el nivel 5 deberá ser probada la relación afectiva. (…) En casos excepcionales, como los de graves violaciones a los derechos humanos, entre otros, podrá otorgarse una indemnización mayor de la señalada en todos los eventos anteriores, cuando existan circunstancias debidamente probadas de una mayor intensidad y gravedad del daño moral, sin que en tales casos el monto total de la indemnización pueda superar el triple de los montos indemnizatorios antes señalados. Este quantum deberá motivarse por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño[[3]](#footnote-3).

Por lo anterior, resulta oportuno señalar que las pretensiones por este ítem denotan un evidente ánimo especulativo, partiendo de la errónea tasación de los perjuicios morales, derivada de una estimación desmesurada del supuesto perjuicio inmaterial. Cada una de las personas que integran la parte actora solicita el reconocimiento de esta tipología de perjuicio, sin que se acredite por los medios idóneos que efectivamente han experimentado un daño que justifique la magnitud de las sumas reclamadas.

Es importante destacar que la cuantificación de los perjuicios morales debe basarse en criterios objetivos y razonables, lo que incluye la consideración de factores como la naturaleza del daño, su duración, las circunstancias que lo rodean y su impacto en la vida de los afectados. Sin embargo, en este caso, la parte demandante no ha proporcionado evidencia suficiente que respalde sus alegaciones, lo que pone de manifiesto la falta de fundamento de sus pretensiones. En este sentido, el Consejo de Estado, mediante sentencia del 20 de octubre de 2014[[4]](#footnote-4), estableció lo siguiente:

Toda reparación, parte de la necesidad de verificar la materialización de una lesión a un bien o interés jurídico tutelado (daño antijurídico), o una violación a un derecho que, consecuencialmente, implica la concreción de un daño que, igualmente, debe ser valorado como antijurídico dado el origen de este (una violación a un postulado normativo preponderante”).

Desde cualquier punto de vista es evidente el ánimo especulativo y la errónea tasación de los perjuicios, en tanto los mismos resultan exorbitantes. Lo anterior, como quiera que se pone de presente que la parte demandante pretende el reconocimiento de los topes máximos indemnizatorios fijados por el Consejo de Estado sin que se encuentren acreditados los presupuestos para su reconocimiento. Lo cual evidencia que la tasación de los daños morales solicitados por los demandantes es improcedente. En consecuencia, deberá desestimarse la infundada tasación de perjuicios propuesta por el extremo actor ante la ausencia de prueba de la extensión del perjuicio pretendido.

Frente al reconocimiento del denominado daño a la vida de relación como tipología autónoma de perjuicio inmaterial dentro del presente proceso, toda vez que no tiene cabida ni reconocimiento jurídico alguno en el marco de la jurisdicción contencioso-administrativa, conforme a la unificación jurisprudencial adoptada por la Sección Tercera del Consejo de Estado a partir del 28 de agosto de 2014.

En dicha providencia de unificación (Sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, Exp. 31172), el Alto Tribunal estableció de manera clara que los perjuicios inmateriales susceptibles de ser reconocidos son el daño moral, el daño a la salud y, en determinados eventos, el daño a la libertad o a la honra, descartando expresamente el daño a la vida de relación como categoría indemnizable independiente, por considerarlo difuso, redundante y subsumible dentro de otros perjuicios debidamente reconocidos por la jurisprudencia. En consecuencia, cualquier pretensión que busque el reconocimiento y pago de una indemnización bajo el rótulo de "daño a la vida de relación" debe ser desestimada, por cuanto no se encuentra prevista dentro de las categorías de perjuicios reconocidas por la jurisprudencia vigente y unificada en materia de responsabilidad extracontractual del Estado.

1. **GENÉRICA O INNOMINADA**

Solicito al señor Juez decretar cualquier otra excepción de fondo que resulte probada en el curso del proceso y que pueda corroborar que no existe obligación alguna a cargo del extremo pasivo de la *litis* y que pueda configurar otra causal que la exima de toda obligación indemnizatoria.

Por todo lo anterior solicito respetuosamente declarar probada esta excepción.

**CAPITULO II**

**CONTESTACIÓN AL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA FORMULADO POR CAFAMAZ**

1. **FRENTE A LOS HECHOS DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA**

**AL HECHO PRIMERO:** Es cierto, conforme a lo expuesto tanto en la demanda como en la contestación, que la vinculación de CAFAMAZ al presente proceso se origina en virtud del Convenio de Asociación No. 044 de 2019, suscrito con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF.

**AL HECHO SEGUNDO:** Es cierto. Sin embargo, esto no implica que la responsabilidad y las obligaciones recaigan automáticamente sobre la aseguradora. Por el contrario, estos hechos deben ser evaluados en el marco del debate probatorio y, en consecuencia, deberán ser analizados por el juez en cuanto a la cobertura material y temporal de la póliza.

**AL HECHO TERCERO:**  Es cierto; sin embargo, esto no implica que la responsabilidad y las obligaciones recaigan automáticamente sobre la aseguradora. Por el contrario, estos hechos deben ser evaluados en el marco del debate probatorio y, en consecuencia, deberán ser analizados por el juez en cuanto a la cobertura material y temporal de la póliza.

**AL HECHO CUARTO:** No es un hecho, es una apreciación formulada por la entidad que realiza el llamado en garantía. Es claro que los hechos deben ser evaluados en el marco del debate probatorio y, en consecuencia, deberán ser analizados por el juez en cuanto a la cobertura material y temporal de la póliza.

**AL HECHO QUINTO:** Es cierto, según las actuaciones procesales que se han surtido hasta el momento.

**AL HECHO SEXTO:** Es cierto, de conformidad con la narración de los hechos de la demanda.

**AL HECHO SEXTO:** No es cierto, la mera existencia de la póliza de seguros no indica que la misma tenga cobertura material y temporal para hacerse efectiva dentro del proceso.

1. **OPOSICIÓN A LAS PRETENSIONES DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA**

En relación con las pretensiones del llamamiento en garantía, me opongo a que se atribuya responsabilidad a la compañía de seguros que represento, toda vez que en el presente caso no se ha configurado el riesgo asegurado previsto en la póliza de responsabilidad civil extracontractual que se pretende afectar en este caso. En ese sentido, la no configuración del hecho generador de responsabilidad implica necesariamente la inexistencia del siniestro asegurado, lo que impide jurídicamente que se afecte la póliza o que se trasladen consecuencias patrimoniales a la aseguradora.

Aunado a lo anterior, solicito al despacho que, al analizar la relación sustancial entre mi representada y el llamante, se consideren los límites y coberturas acordadas, las condiciones particulares y generales de la póliza, y las disposiciones que rigen el contrato de seguro. Igualmente, debe evaluarse si los hechos exceden el ámbito amparado por la póliza, si no se ha demostrado la materialización del riesgo asegurado, o si concurre alguna causa de exclusión que limite la cobertura.

1. **EXCEPCIONES FRENTE AL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA**
2. **FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA DE CAFAMAZ PARA LLAMAR EN GARANTÍA A LA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA E.C.**

Dentro del presente proceso, se debe alegar la falta de legitimación en la causa por activa por parte de la Caja de Compensación Familiar del Amazonas – CAFAMAZ para efectuar el llamamiento en garantía a la Aseguradora Solidaria de Colombia E.C., dado que no ostenta la calidad de asegurado dentro del contrato de seguro invocado.

La póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual que se pretende hacer efectiva tiene como único asegurado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, tal como se desprende del contenido literal de la misma. El objeto del contrato fue claramente definido como:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEL **ASEGURADO** POR DAÑOS OCASIONADOS A TERCEROS EN SUS BIENES Y PERSONAS EN DESARROLLO CONVENIO DE ASOCIACION NO. 044 DEL 29 DE ENERO DE 2019.

Entonces, la legitimación en la causa implica la relación verdadera que tiene la parte convocada con los hechos que dieron lugar al litigio. Al respecto, el Consejo de Estado ha indicado lo siguiente:

La legitimación material, en cambio, supone la conexión entre las partes y los hechos constitutivos del litigio, ora porque resultaron perjudicadas, ora porque dieron lugar a la producción del daño. En un sujeto procesal que se encuentra legitimado de hecho en la causa no necesariamente concurrirá́, al mismo tiempo, legitimación material, pues ésta solamente es predicable de quienes participaron realmente en los hechos que han dado lugar a la instauración de la demanda o, en general, de los titulares de las correspondientes relaciones jurídicas sustanciales; por consiguiente, el análisis sobre la legitimación material en la causa se contrae a dilucidar si existe, o no, relación real de la parte demandada o de la demandante con la pretensión que ésta fórmula o la defensa que aquella realiza, pues la existencia de tal relación constituye condición anterior y necesaria para dictar sentencia de mérito favorable a una o a otra (...)[[5]](#footnote-5)

En ese sentido, el único legitimado para ejercer acciones derivadas de dicha póliza es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, por cuanto es quien figura expresamente como asegurado, tal como se establece en el contenido de la póliza de responsabilidad civil extracontractual aportada al expediente, en la que no aparece la Caja de Compensación Familiar del Amazonas – CAFAMAZ como asegurado, coasegurado, ni como beneficiario. Por otro lado, es el ICBF quien ostenta el interés asegurable, en la medida en que el contrato de seguro fue suscrito con el objeto de proteger su patrimonio frente a eventuales reclamaciones por daños ocasionados a terceros, derivados del desarrollo del Convenio de Asociación No. 044 del 29 de enero de 2019. CAFAMAZ, en su condición de ejecutor del convenio, actúa como un tercero frente al contrato de seguro, sin que se derive de dicha condición un derecho autónomo para accionar en contra del asegurador.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1077 del Código de Comercio, únicamente podrá ejercer acciones derivadas del contrato de seguro quien sea parte del mismo o tenga un derecho legalmente reconocido sobre la prestación asegurada, es decir, el asegurado o el beneficiario designado en la póliza. **En este caso particular, el único asegurado que figura expresamente en la póliza es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, entidad que, además, ostenta el interés asegurable, y a quien en los mismos términos le corresponde demostrar la ocurrencia del siniestro**.

En consecuencia, **CAFAMAZ no tiene legitimación en la causa por activa** para llamar en garantía a la Aseguradora Solidaria de Colombia E.C., ya que no ostenta la calidad de tomador, asegurado ni beneficiario de la póliza, ni tiene derecho alguno sobre la prestación asegurada. Tampoco tiene vínculo contractual directo con la compañía de seguros que le permita trasladarle la responsabilidad que eventualmente llegare a declararse en su contra. Por tanto, **carece de capacidad jurídica para exigir el cumplimiento de obligaciones derivadas de un contrato del cual no es parte**.

1. **IMPROCEDENCIA PARA HACER EFECTIVOS LOS AMPAROS DEL CONTRATO DE SEGURO POR HABER OPERADO LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE SEGUROS.**

De los hechos y pretensiones formuladas tanto en la demanda como en el llamamiento en garantía, se evidencia que en el presente caso opera la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro, conforme a lo previsto en los artículos 1081 y 1131 del Código de Comercio. Ello, por cuanto la única entidad legitimada para hacer efectivos los amparos contenidos en la póliza es el ICBF, quien figura como único asegurado. Sin embargo, tal como se expuso en la excepción anterior, el ICBF no ejerció ninguna acción ni formuló requerimiento formal alguno que produjera efectos interruptivos del término prescriptivo, motivo por el cual la acción se encuentra extinguida por el transcurso del tiempo. En ese sentido los términos que establece el artículo 1081 del Código de Comercio, para que exigiera la afectación de la póliza. La mencionada disposición específicamente señala:

Art. 1081. La prescripción de las acciones que se derivan del contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen podrá ser ordinaria o extraordinaria.

**La prescripción ordinaria será de dos años y empezará a correr desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción.**

La prescripción extraordinaria será de cinco años, correrá contra toda clase de personas y empezará a contarse desde el momento en que hace el respectivo derecho. Estos términos no pueden ser modificados por las partes”. (Negrilla y subrayado fuera del texto original).

En el primero de los casos, como se observa, la prescripción opera para el asegurado; mientras que en el segundo para cualquier clase de persona (tercero afectado). Del texto normativo, destaca el conocimiento real o presunto del hecho que da base a la acción, como rasgo que diferencia la prescripción ordinaria de la extraordinaria, pues en tanto la primera exige la presencia de este elemento subjetivo, en la segunda no se efectúa esa distinción. Sobre este particular y en especial para establecer la diferencia entre los dos tipos de prescripciones derivadas del contrato de seguro, la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil ha manifestado lo siguiente:

(...) En este orden de ideas, resulta claro que el legislador colombiano del año 1971, siguiendo un criterio ciertamente diferente al establecido por la legislación civil nacional y buena parte de la comparada –en general-, prohijó para el contrato de seguro dos tipos de prescripción divergentes: la ordinaria y la extraordinaria (...)

Es así, se reitera, cómo en punto tocante al inicio del referido decurso, **se tiene establecido que la ordinaria correrá desde que se haya producido el conocimiento real o presunto del hecho que da base a la acción (el siniestro, el impago de la prima, el incumplimiento de la garantía, (...), al paso que la extraordinaria, justamente por ser objetiva, correrá sin consideración alguna el precitado conocimiento.** De allí que, expirado el lustro, indefectiblemente, irrumpirán los efectos extintivos o letales inherentes a la prescripción en comento. (Subrayado y negrilla fuera del texto original)

Ahora bien, el artículo 1131 del Código de Comercio, indica la forma en la que se determina el momento a partir del cual corren los términos de prescripción:

(…) **Artículo 1131: OCURRENCIA DEL SINIESTRO**: **En el seguro de responsabilidad se entenderá ocurrido el siniestro en el momento en que acaezca el hecho externo imputable al asegurado**, fecha a partir de la cual correrá la prescripción respecto de la víctima. **Frente al asegurado ello ocurrirá desde cuando la víctima le formula la petición judicial o extrajudicial** (…) (Subrayado y negrilla fuera del texto original)

Para el caso que nos ocupa, se advierte que se encuentra acreditada la configuración del término prescriptivo de la acción con respecto a la póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual, toda vez que los hechos que dieron lugar al presunto daño ocurrieron el 7 de febrero de 2019, y desde entonces no se presentó requerimiento alguno por parte del ICBF —único legitimado para ejercer acciones derivadas del contrato— que interrumpiera válidamente el curso de la prescripción. Así las cosas, al haber transcurrido en su integridad el término de dos (2) años previsto en el artículo 1081 del Código de Comercio, sin que se ejerciera oportunamente ninguna acción dirigida a hacer efectiva la póliza, resulta evidente que ha operado la prescripción de las obligaciones contenidas en el contrato de seguro, razón por la cual debe rechazarse cualquier pretensión dirigida contra la aseguradora dentro del presente proceso.

Por lo anterior, se solicita al Honorable Despacho declarar fundada y próspera la presente excepción.

1. **NO EXISTE OBLIGACIÓN INDEMNIZATORIA A CARGO DE LA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA E.C., TODA VEZ QUE NO SE HAN MATERIALIZADO LAS EXCLUSIONES CONTENIDAS EN LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 380 74 994000011867**

En el presente caso no existe obligación alguna de indemnizar por parte de mi representada, la Aseguradora Solidaria de Colombia E.C., toda vez que se han configurado plenamente algunas de las exclusiones pactadas en la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 380 74 994000011867, las cuales fueron aceptadas expresamente por las partes contratantes. Así las cosas, la clausula segunda correspondiente a las exclusiones indica qué:

CLÁUSULA SEGUNDA. EXCLUSIONES LA PRESENTE PÓLIZA NO AMPARA:

(…)

2. LAS LESIONES PERSONALES O DAÑOS MATERIALES CAUSADOS A TERCERAS PERSONAS CON DOLO DEL ASEGURADO.

(…)

18. DAÑOS A CAUSA DE LA INOBSERVANCIA DE DISPOSICIONES LEGALES, DE ÓRDENES IMPARTIDAS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE O DE INSTRUCCIONES Y ESTIPULACIONES CONTRACTUALES.”

De acuerdo con la cláusula segunda del contrato, la póliza no ampara las lesiones personales causadas con dolo. Así, en el hipotético caso de que los hechos descritos en la demanda se probaran, estos configurarían una conducta dolosa —como lo sería un acto sexual contra una menor—, lo cual excluye automáticamente cualquier cobertura, ya que se trata de una acción deliberada, y no de un hecho accidental o culposo.

Adicionalmente, la póliza excluye los daños derivados de la inobservancia de disposiciones legales o estipulaciones contractuales. Los hechos en cuestión habrían ocurrido en el marco de la ejecución del Convenio de Asociación No. 044 de 2019, por lo que cualquier incumplimiento en la ejecución de dicho contrato constituye una causal expresa de exclusión. En consecuencia, al estar acreditadas dos causas de exclusión —actuar doloso e incumplimiento contractual—, no se configura la realización del riesgo asegurado ni la obligación de indemnizar por parte de la compañía. Por lo tanto, deben rechazarse las pretensiones formuladas en contra de la aseguradora.

1. **NO EXISTE OBLIGACIÓN INDEMNIZATORIA A CARGO DE LA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA E.C., TODA VEZ QUE NO SE HA REALIZADO EL RIESGO ASEGURADO EN LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 380 74 994000011867**

Debe señalarse que no existe obligación indemnizatoria a cargo de mi representada, Aseguradora Solidaria de Colombia, en relación con la Póliza de Responsabilidad Civil ExtracontractualNo. 380 74 994000011867. Lo anterior se fundamenta en que no se ha configurado el riesgo asegurado ni se ha materializado el hecho dañoso contemplado en dicha póliza. En el presente caso, los hechos en litigio están relacionados con la solicitud de reconocimiento e indemnización de un presunto daño alegado por los demandantes, sin que exista prueba alguna que permita atribuir al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF o a la Caja de Compensación Familiar del Amazonas – CAFAMAZ una acción u omisión que configure una falla en la prestación del servicio o el incumplimiento de los deberes de protección a su cargo.

Según los antecedentes del caso, los hechos se enmarcan en un presunto acto de abuso sexual ocurrido en el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) MAÜ, el cual fue operado por CAFAMAZ en virtud del convenio de asociación suscrito con el ICBF. No obstante, del análisis del acervo probatorio se desprende que tanto el ICBF como CAFAMAZ cumplieron con las obligaciones legales y contractuales en la ejecución del programa de atención a la primera infancia, implementando protocolos de seguridad, selección idónea del personal y vigilancia durante las jornadas de atención a los menores.

Adicionalmente, no se ha demostrado la existencia de un nexo causal directo entre la conducta de las entidades demandadas y el presunto daño alegado, ni tampoco la ocurrencia de una falla en el servicio que permita configurar la responsabilidad extracontractual del Estado. En consecuencia, no resulta procedente la declaración de responsabilidad ni la imposición de condena alguna en contra del ICBF ni de CAFAMAZ.

En consonancia con lo anterior el artículo 1072 del Código de Comercio define como siniestro:

**ARTÍCULO 1072. DEFINICIÓN DE SINIESTRO**. Se denomina siniestro la realización del riesgo asegurado.

Así las cosas, no ha nacido la obligación condicional a cargo de mi mandante, por cuanto no se ha acreditado ninguna acción u omisión atribuible a las entidades demandadas que permita configurar un hecho generador de responsabilidad, ni mucho menos se ha demostrado la realización del riesgo cubierto por la póliza de seguro. En consecuencia, no se satisfacen los presupuestos contractuales ni jurídicos necesarios para que surja la obligación de indemnizar por parte de la compañía de seguros, motivo por el cual deben ser rechazadas en su totalidad las pretensiones formuladas en su contra dentro del presente proceso.

Adicionalmente, la póliza excluye los daños derivados de la inobservancia de disposiciones legales o estipulaciones contractuales. Los hechos en cuestión habrían ocurrido en el marco de la ejecución del Convenio de Asociación No. 044 de 2019, suscrito entre el ICBF y CAFAMAZ, cuyo objeto era la atención integral de menores de edad. Cualquier conducta que implique la vulneración de las obligaciones pactadas en dicho convenio, especialmente aquellas relacionadas con la protección de la infancia, configura una clara inobservancia de las estipulaciones contractuales. Esta situación está expresamente excluida por la póliza, conforme a su cláusula segunda. En consecuencia, al configurarse al menos dos causales de exclusión —la existencia de dolo en la conducta imputada y el incumplimiento de disposiciones contractuales—, no se satisface el supuesto de hecho necesario para que surja la obligación asegurativa. Por tanto, no procede trasladar responsabilidad alguna a la Aseguradora Solidaria de Colombia E.C., y las pretensiones en su contra deben ser desestimadas en su totalidad.

1. **LÍMITE DE COBERTURA: IMPOSIBILIDAD DE EXCEDER EL VALOR ASEGURADO EN LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 380 74 994000011867**

En el remoto e improbable evento en que el despacho considere que sí ha nacido a la vida jurídica la obligación condicional de **LA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA E.C.,** en virtud de la póliza vinculada. Exclusivamente bajo esta hipótesis, el juzgado deberá tener en cuenta entonces que no se podrá condenar a mi poderdante al pago de una suma mayor a la asegurada, incluso si se lograra demostrar que los presuntos daños reclamados son superiores. Por supuesto, sin que esta consideración constituya aceptación de responsabilidad alguna a cargo de mi representada.

En este orden de ideas, mi procurada no estará llamada a pagar cifra que exceda el valor asegurado previamente pactado por las partes, en tanto que la responsabilidad de mi mandante va hasta la concurrencia de la suma asegurada. De esta forma y de conformidad con el artículo 1079 del Código de Comercio, debe tenerse en cuenta la limitación de responsabilidad hasta la concurrencia de la suma asegurada:

**ARTÍCULO 1079. RESPONSABILIDAD HASTA LA CONCURRENCIA DE LA SUMA ASEGURADA**. El asegurador no estará obligado a responder si no hasta concurrencia de la suma asegurada, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1074.

La norma antes expuesta es completamente clara al explicar que la responsabilidad del asegurador va hasta la concurrencia de la suma asegurada. De este modo, la Corte Suprema de Justicia ha interpretado el precitado artículo en los mismos términos al explicar:

Al respecto es necesario destacar que, como lo ha puntualizado esta Corporación, **el valor de la prestación a cargo de la aseguradora**, en lo que tiene que ver con los seguros contra daños, **se encuentra delimitado, tanto por el valor asegurado**, como por las previsiones contenidas en el artículo 1089 del Código de Comercio, conforme al cual, dentro de los límites indicados en el artículo 1079 la indemnización no excederá, en ningún caso, del valor real del interés asegurado en el momento del siniestro, ni del monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado o el beneficiario, regla que, además de sus significativas consecuencias jurídicas, envuelve un notable principio moral: evitar que el asegurado tenga interés en la realización del siniestro, derivado del afán de enriquecerse indebidamente, a costa de la aseguradora, por causa de su realización”[[6]](#footnote-6) (Subrayado y negrilla fuera del texto original)

Por ende, no se podrá de ninguna manera obtener una indemnización superior en cuantía al límite de la suma asegurada por parte de mi mandante y en la proporción de dicha pérdida que le corresponda debido a la porción de riesgo asumido. Así las cosas, el límite de la responsabilidad de la aseguradora corresponde a la suma asegurada individual indicado en la carátula de la Póliza, así:



Por todo lo anterior, comedidamente le solicito al honorable despacho tomar en consideración que, **LA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA E.C** no puede ser condenada por un mayor valor que el expresamente establecido en la póliza ante referida. En todo caso, dicha póliza contiene unos límites y valores asegurados que deberán ser tenidos en cuenta por el juzgado en el remoto e improbable evento de una condena en contra de mi representada.

1. **DEDUCIBLE PACTADO EN LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 380 74 994000011867.**

Subsidiariamente a los argumentos previamente expuestos, y sin perjuicio de los fundamentos presentados a lo largo de este escrito, sin que ello constituya aceptación de responsabilidad alguna por parte de mi representada, en el improbable caso de que el honorable despacho considere que la aseguradora tiene la obligación de realizar algún pago indemnizatorio, resulta esencial que se tengan en cuenta los deducibles pactados en el contrato de seguro correspondiente a la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 380 74 994000011867 dicho deducible, previamente acordados, deberán aplicarse a cualquier monto indemnizatorio en caso de que se determine alguna responsabilidad en contra de mi representada.



En este orden de ideas, resulta de suma importancia que el honorable juzgador tome en consideración que, tanto la definición del deducible como su forma de aplicación, ha sido ampliamente desarrollada por la Superintendencia Financiera de Colombia en distintos conceptos, como el que se expone a continuación:

Una de tales modalidades, **la denominada deducible, se traduce en la suma que el asegurador descuenta indefectiblemente del importe de la indemnización, de tal suerte que en el evento de ocurrencia del siniestro no indemniza el valor total de la pérdida**, sino a partir de un determinado monto o de una proporción de la suma asegurada, con el objeto de dejar una parte del valor del siniestro a cargo del asegurado. El deducible, que puede consistir en una suma fija, en un porcentaje o en una combinación de ambos, se estipula con el propósito de concientizar al asegurado de la vigilancia y buen manejo del bien o riesgo asegurado.

En este orden de ideas, correspondería a las partes en el contrato de seguro determinar el porcentaje de la pérdida que sería asumido por el asegurado a título de deducible, condición que se enmarcaría dentro de las señaladas por el numeral 11 del artículo 1047 del Código de Comercio al referirse a “Las demás condiciones particulares que acuerden los contratantes[[7]](#footnote-7). (Subrayado y negrilla fuera de texto original)

En el hipotético caso de que mi representada sea declarada responsable de pagar una indemnización a la parte actora en virtud del contrato de seguro, es de suma importancia que el honorable juzgador tenga en cuenta el deducible pactado en la póliza correspondiente. Como se establece en el contrato, para la póliza N° **380 74 994000011867,** el deducible es del diez (10%) por ciento del valor de la pérdida o 1.00 SMLMV. Por lo tanto, el importe de la indemnización deberá descontar dicha suma, conforme a las condiciones acordadas entre las partes.

1. **CARÁCTER MERAMENTE INDEMNIZATORIO QUE REVISTEN LOS CONTRATOS DE SEGUROS.**

Es un principio que rige el contrato de seguro de daños, el carácter indemnizatorio del mismo, esto es, que el contrato de seguro tiene como interés asegurable la protección de los bienes o el patrimonio de una persona que pueda afectarse directa o indirectamente por la realización del riesgo. De modo que la indemnización que por la ocurrencia de dicho siniestro corresponda, nunca podrá ser superior al valor asegurado. Así las cosas, el carácter de los seguros de daños y en general de cualquier seguro, es meramente indemnizatorio, esto es, que no puede obtener ganancia alguna el asegurado/beneficiario con el pago de la indemnización. Es decir, no puede nunca pensarse el contrato de seguro como fuente de enriquecimiento. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, respecto al carácter indemnizatorio del Contrato de Seguro, en sentencia del 22 de julio de 1999, expediente 5065, dispuso:

Este contrato no puede ser fuente de ganancias y menos de riqueza, sino que se caracteriza por ser indemnizatorio. La obligación que es de la esencia del contrato de seguro y que surge para el asegurador cumplida la condición, corresponde a una prestación que generalmente tiene un alcance variable, pues depende de la clase de seguro de la medida del daño efectivamente sufrido y del monto pactado como limitante para la operancia de la garantía contratada, y que el asegurador debe efectuar una vez colocada aquella obligación en situación de solución o pago inmediato.

En tal sentido, el artículo 1088 del Código de Comercio estableció lo siguiente:

**Respecto del asegurado, los seguros de daños serán contratos de mera indemnización y jamás podrán constituir para él fuente de enriquecimiento.** La indemnización podrá comprender a la vez el daño emergente y el lucro cesante, pero éste deberá ser objeto de un acuerdo expreso. (Subrayado y negrilla fuera de texto).

Así las cosas, no debe perderse de vista que las solicitudes presentadas en el escrito de demanda, en particular las relacionadas con perjuicios morales, no son procedentes. Su reconocimiento por parte de las entidades demandadas, puntualmente CAFAMAZ implicaría una transgresión del principio indemnizatorio esencial en el contrato de seguro, el cual tiene como objetivo restaurar, pero no enriquecer a la parte demandante. En este caso, otorgar una indemnización por perjuicios morales sería indebido, ya que la entidad no tuvo ninguna relación con los daños morales, psicológicos ya la vida en relación que erradamente alegan los demandantes, lo que resultaría en un enriquecimiento injusto de la parte demandante al recibir una compensación que no corresponde a un hecho imputable a la entidad asegurada.

Conforme a ello, dado que los perjuicios solicitados en el petitum de la demanda presentan serias inconsistencias, reconocer el pago de suma alguna con cargo a la póliza de seguro, implicaría correlativamente transgredir el carácter meramente indemnizatorio que revisten los contratos de seguro. En efecto, se estaría supliendo la carga probatoria de la parte actora frente a los presupuestos de una responsabilidad patrimonial del Estado y eventualmente enriqueciendo a los accionantes.

En conclusión, no puede perderse de vista que los contratos de seguro no puede ser fuente de enriquecimiento y que el mismo atiene a un carácter meramente indemnizatorio. Por todo lo anterior y teniendo en cuenta la indebida solicitud y tasación de perjuicios, se deberá declarar probada la presente excepción y así evitar la contravención del carácter indemnizatorio del contrato de seguro y un correlativo un enriquecimiento sin justa causa en cabeza de la actora.

# INEXISTENCIA DE SOLIDARIDAD ENTRE MI MANDANTE Y LOS DEMÁS DEMANDADOS EN EL MARCO DEL CONTRATO DE SEGURO.

Esta excepción se propone con fundamento en que la solidaridad surge exclusivamente cuando la Ley o la convención la establecen. En el caso que nos ocupa, la fuente de las obligaciones de mi procurada está contenida en el contrato de seguro y en él no está convenida la solidaridad entre las partes del contrato.

Es importante recabar sobre el particular por cuanto a que la obligación de mí representada la compañía LA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA E.C. tiene su génesis en un contrato de seguro celebrado dentro de unos parámetros y límites propios de la autonomía de la voluntad privada y no de la existencia de responsabilidad civil extracontractual propia de la aseguradora, sino de la que se pudiere atribuir al asegurado conforme lo establecido por el artículo 2341 del Código Civil, por tanto se encuentra frente a dos responsabilidades diferentes a saber: en primer lugar la del asegurado por la responsabilidad civil extracontractual que se le llegaré a atribuir, cuya fuente de obligación indemnizatoria emana de le ley propia. En segundo lugar, La de mí representada aseguradora cuyas obligaciones no emanan de la ley propiamente dicha, sino de la existencia de un contrato de seguro celebrado dentro de los parámetros dados por los artículos 1036 del Código de Comercio y S.S., encontrándose las obligaciones de mí representada debidamente delimitadas por las condiciones pactadas en el contrato de seguro celebrado, constituyéndose entonces las obligaciones del asegurado y de la aseguradora en obligaciones independientes y que no son solidarias.

La Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil y mediante ponencia del Dr. Ariel Salazar Ramírez en sentencia SC20950-2017 Radicación N° 05001-31-03-005-2008- 00497-01 ha indicado que:

(…) Por último, **la compañía aseguradora no está llamada a responder de forma solidaria por la condena impuesta, sino atendiendo que «el deber de indemnizar se deriva de una relación contractual**, que favoreció la acción directa por parte del demandante en los términos del artículo 1134 del C. de Co (…) (Subrayado y negrilla fuera de texto)

Entendido lo anterior, es preciso indicar que la solidaridad de las obligaciones en Colombia solo se origina por pacto que expresamente la convenga entre los contrayentes, lo anterior según el art. 1568 del Código Civil Colombiano que reza:

(…) **En general cuando se ha contraído por muchas personas o para con muchas la obligación de una cosa divisible, cada uno de los deudores, en el primer caso, es obligado solamente a su parte o cuota en la deuda**, y cada uno de los acreedores, en el segundo, sólo tiene derecho para demandar su parte o cuota en el crédito.

Pero **en virtud de la convención**, del testamento o de la ley puede exigirse cada uno de los deudores o por cada uno de los acreedores el total de la deuda, y entonces la obligación es solidaria o in solidum.

**La solidaridad debe ser expresamente declarada en todos los casos en que no la establece la ley**. (…)

En virtud de tal independencia en las obligaciones, se formula esta excepción por cuanto el artículo 1044 del Código de Comercio faculta a la aseguradora proponer al tercero beneficiario las excepciones y exclusiones que pudiere interponerle al asegurado o tomador del contrato de seguro, motivo por el cual puede alegar mí representada la ausencia de cobertura ante la falta de prueba de la ocurrencia y cuantía del siniestro y las exclusiones y demás condiciones que resultaren atribuibles al presente evento.

Debe aclararse que las obligaciones de la aseguradora que represento están determinadas por el límite asegurado para cada amparo, por las condiciones del contrato de seguro y por la normatividad que lo rige. Por lo tanto, la obligación indemnizatoria que remotamente podría surgir a su cargo está estrictamente sujeta a las estipulaciones contractuales y al límite asegurado.

1. **DISPONIBILIDAD DEL VALOR ASEGURADO**

Sin que con el planteamiento de esta excepción se esté aceptando responsabilidad alguna por parte de mi representada, es pertinente manifestar que, conforme a lo dispuesto en el artículo 1111 del Código de Comercio, el valor asegurado de una póliza se reducirá conforme a los siniestros presentados y a los pagos realizados por la Aseguradora, por tanto, a medida que se presenten más reclamaciones por personas con igual o mayor derecho y respecto a los mismo hechos, dicho valor se disminuirá en esos importes, siendo que, si para la fecha de la sentencia y ante una condena, se ha agotado totalmente el valor asegurado, no habrá lugar a obligación indemnizatoria por parte de mi prohijada.

1. **PAGO POR REEMBOLSO**

Sin que el planteamiento de esta excepción constituya aceptación de responsabilidad alguna por parte de mi representada, se solicita al honorable juez que, en el remotísimo caso de encontrar responsable al asegurado y de llegar a establecer que ha surgido alguna obligación resarcitoria en cabeza de la aseguradora, respetuosamente se manifiesta que la obligación de mi representada deberá imponerse por reembolso y no por pago directo a los demandantes, ya que es el asegurado quien debe decidir si afecta o no el seguro, quedándole la opción de realizar el pago directo de la hipotética condena.

1. **GENÉRICA O INNOMINADA**

Solicito declarar cualquier otra excepción que resulte probada en el curso del proceso, frente a la demanda, que se origine en la Ley o en el contrato que con el que se convocó a mi poderdante, incluida la de caducidad y la de prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro contemplada en el artículo 1081 del Código de Comercio.

**CAPÍITULO VII**

**MEDIOS DE PRUEBA**

Solicito respetuosamente se decreten como pruebas las siguientes:

1. **DOCUMENTALES:**
* Copia de **l**a Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 380 74 994000011867 junto con su condicionado particular y general.
1. **INTERROGATORIO DE PARTE:**
* Comedidamente solicito que se cite a la totalidad de los ciudadanos, en su calidad de demandantes, para que absuelvan el interrogatorio que se les formulará respecto a los hechos de la demanda, de la contestación y, en general, de todos los argumentos de hecho y de derecho expuestos en este litigio. Los demandantes podrán ser citados en la dirección de notificación relacionada en la demanda.
1. DE OFICIO
* Que se oficie a la Aseguradora Solidaria de Colombia E.C. para que con destino a este proceso remita certificación del valor asegura en la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 380 74 994000011867

**CAPÍTULO VIII:**

**ANEXOS**

1. Pruebas relacionadas en el acápite de pruebas.
2. Poder para actuar
3. Certificado de existencia y representación legal de LA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA., expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá D.C.

**CAPITULO IX:**

**NOTIFICACIONES**

Al suscrito en la Avenida 6 A Bis No. 35N–100 Oficina 212 de la ciudad de Cali o correo electróniconotificaciones@gha.com.co

Del Señor Juez, respetuosamente,



**GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA**

C.C. No 19.395.114 de Bogotá D.C.

T.P. No. 39.116 del C.S. de la J.

1. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA SUBSECCION C Consejero ponente: ENRIQUE GIL BOTERO Bogotá D.C., veintitrés (23) de mayo de dos mil doce (2012) Radicación número: 17001-23-3-1000-1999-0909-01(22592) [↑](#footnote-ref-1)
2. ORTIZ GÓMEZ Gerardo “Nexo Causal en la Responsabilidad Civil” en: CASTRO Marcela – Derecho de las Obligaciones Tomo II. Editorial Temis S.A. Bogotá 2010. [↑](#footnote-ref-2)
3. CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Plena. Rad. 26251 del 28 de agosto de 2014, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. [↑](#footnote-ref-3)
4. Consejo de Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección C, C.P. Dr. Enrique Gil Botero, radicado 05001-23-31-000-2004-04210-01 (40.060). [↑](#footnote-ref-4)
5. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Tercera, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, radicación N°70001-23- 31- 000-1995-05072-01 (17720). [↑](#footnote-ref-5)
6. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia 5952. Diciembre 14 de 2001. [↑](#footnote-ref-6)
7. Superintendencia Financiera de Colombia. Concepto 016118318-001. Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual. Deducible. Noviembre 29 de 2016. [↑](#footnote-ref-7)